

C. INSERCIONES

1

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA
DIPUTADA MONTENEGRO

**Fundamentos de la oposición de la señora diputada
al proyecto de ley en revisión por el que se crea la
empresa Energía Argentina Sociedad Anónima
(ENARSA)**

La política de privatizaciones llevada a cabo en la década del 90 debilitó, entre otras muchas cosas, el rol del Estado en el área energética.

Pero este proyecto, de ninguna manera refuerza el papel del Estado ni recupera soberanía.

Por el contrario, su aprobación sólo generará confusiones y conflictos. Es un proyecto que no define líneas políticas o estratégicas sino que establece la creación de una sociedad anónima privada.

Estimo que el más grave cuestionamiento pasa por la transferencia de áreas de exploración petrolera de propiedad reservada del Estado nacional según la Constitución Nacional a una sociedad en la que intervienen personas privadas.

La atribución de facultades tendientes a intervenir en el mercado energético evitando situaciones de abuso de posición dominante genera un conflicto de facultades con las reparticiones del Estado encargadas de la defensa de la competencia.

Es dable destacar que por principio, las facultades propias de la autoridad administrativa no se pueden delegar o transferir a sociedades privadas.

Otro interrogante surge sobre las fuentes de financiamiento para obtener los enormes recursos de capital que se requieren en el negocio energético. Recordemos la situación de emergencia económica que afecta al Estado nacional, imposibilitado de atender normalmente no solo sus compromisos financieros con acreedores internos y externos, sino poder ejercer sus funciones de atención a las graves necesidades sociales que afectan a la población.

El proyecto concede una nueva delegación de atribuciones al Poder Ejecutivo nacional, para realizar adecuaciones presupuestadas necesarias para suscribir e integrar el capital social, las que por su elevado monto llevan a sustraer nuevamente facultades en el control de las finanzas públicas por el Congreso.

La futura sociedad tendrá una participación privada del 35 por ciento sobre su capital, lo que implica la transferencia sin licitación previa de áreas de explotación y exploración petrolera ubicadas en la plataforma marítima y de todos los recursos que en ella puedan estar contenidos. Ya el propio mensaje de elevación desliza la posibilidad de que capitales extranjeros puedan intervenir en el emprendimiento.

También ha suscitado críticas la inclusión de la energía nuclear en el objeto de la empresa ya que el Estado nacional cuenta con organismos y empresas que trabajan en ese sector de elevada importancia estratégica y ambiental.

Además, propone a los legisladores votar la constitución de una empresa sin saber cuál va a ser su plan estratégico de negocios en el corto, mediano y largo plazo.

Las sociedades anónimas pueden ser creadas por un acto fundacional, que puede ser un contrato o como en este caso, una ley. Sucede que su actuación futura debe ser regulada por un estatuto, que no forma parte del proyecto.

En cuanto a la integración del directorio no se estableció ninguna clase de requisitos que permitan asegurar la idoneidad de sus miembros. Esta ley abre la posibilidad de que se lo integre con funcionarios vinculados al poder político y no con profesionales de renombre en la actividad designados tras un procedimiento de audiencias públicas controlado por el Congreso.

Quedan delegados al Poder Ejecutivo nacional y a la propia sociedad importantísimos capítulos del funcionamiento normativo, cuestión realmente inaceptable atento los intereses estratégicos de la cuestión.

En cuanto al control externo e interno de las actividades de la sociedad, mereció graves críticas cuando el texto fue aprobado por el Senado, el que excluye a las actividades de ENARSA del control de los organismos del Estado limitando los mismos a los típicos de cualquier persona jurídica.

Volviendo a la integración accionaria de la empresa, el proyecto aprobado por el Senado no contiene ninguna cláusula de integración del capital que garantice la mayoría al Estado nacional, limitando futuras ampliaciones del capital.

Existe la posibilidad de que al ampliarse la participación privada por vía de un aumento del capital, la porción accionaria del Estado resulte aguada quedando en minoría. Lo grave es que ello determina una grave pérdida de soberanía por vía de la transferencia de importantes recursos naturales no renovables del patrimonio nacional.

Y a pesar de que el bloque de la UCR está de acuerdo en la creación de un ente estatal que cumpla realmente el objetivo fundamental como es el de la protección de nuestra soberanía y patrimonio, votará en contra del proyecto, pues no responde a los fines más altos de la República.

2

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO ZOTTOS

Fundamentos de la oposición del señor diputado al proyecto de ley en revisión por el que se crea la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA)

Nos encontramos abocados al tratamiento de un tema trascendental para nuestro país como es todo aquello relacionado con la propiedad y administración de nuestros recursos energéticos.

El dictamen propuesto establece la creación de una empresa con capital estatal mayoritario, ENARSA, cuyo objeto, al que quiero precisar en toda su extensión, será explorar, explotar, producir, generar, transportar, distribuir y comercializar –tanto local como internacionalmente– bienes energéticos en todas sus formas: es decir, petróleo, gas natural, energía eléctrica, carbón, energía nuclear y energías no convencionales como el hidrógeno, sin ningún tipo de limitaciones.

Los defensores de la iniciativa afirman que, en el marco de la preocupante crisis energética que vive el país, se torna fundamental que el Estado asuma un rol decisivo en la administración de los recursos energéticos, a través de una empresa de energía que testimone los reales costos de producción y rentabilidad y termine con el oligopolio actual y el abuso de posición dominante de los actores involucrados.

En esta instancia, quiero dejar sentado que comparto plenamente el concepto de que el Estado asuma un rol activo y eficiente en la conservación, ad-

ministración, percepción de las rentas y control de los bienes energéticos.

Sin lugar a dudas debemos afrontar las necesidades y graves falencias que tiene el sector y los desafíos de nuestro tiempo despojados absolutamente de toda clases de prejuicios.

Por ello creo que a la luz de los aciertos y errores del pasado, hoy el Estado debe hacer uso de todas las herramientas que estén a su alcance para paliar las actuales deficiencias e imprevisiones en materia energética, fijando una política concreta.

Desde este punto de vista una nueva empresa de energía puede ser una herramienta válida, si hay fundamentos que justifiquen la necesidad de su creación. La citada empresa deberá estar regulada por un régimen jurídico preciso, que garantice la transparencia en la administración de los recursos y prevea estrictos mecanismos de control.

Lamentablemente, advierto con gran preocupación que el dictamen que estamos analizando, que crea una nueva sociedad de energía del Estado está colmado de imprecisiones y contradicciones legales.

En primer lugar el proyecto propone la creación de una empresa con capital estatal mayoritario, a la que se le tendría que aplicar el capítulo de las sociedades con participación estatal mayoritaria de la ley 19.550. Sin embargo, se fija especialmente que ENARSA se someterá exclusivamente a las normas de las sociedades anónimas. Es decir, estas normas regularán todos los aspectos que hacen a la constitución, funcionamiento y controles de la sociedad. Con respecto a estos últimos el proyecto ordena claramente que la sociedad tendrá los mismos controles interno y externo de las sociedades de su tipo, con exclusión de cualquier otro control.

En consecuencia, esta empresa operará fuera de la órbita de la ley de administración financiera y no reconocerá a sus órganos de control, me refiero a la SIGEN y a la auditoría.

Se fundamenta la elección tipo legal —el de la sociedad anónima— en la necesidad de agilidad y rapidez que brinda este tipo legal para la realización de negocios. No se puede desconocer que esta forma societaria también ha sido la elegida por otros Estados para crear sus empresas de energía, como el de Venezuela, México o Brasil, para nombrar ejemplos latinoamericanos. Sin embargo a estas empresas las controlan órganos estatales similares a los que prevé nuestra ley de administración financiera en nuestro sistema jurídico.

Si nos atenemos a estas razones para justificar la evasión de los mencionados controles vemos que el control a posteriori que realiza la Auditoría de la Nación no implicaría ningún obstáculo o entorpecimiento al giro del negocio.

Omitir la actividad de la Auditoría solo contribuiría a privar a ENARSA del contralor apropiado que requiere la administración de bienes estratégicos para el Estado.

Se impulsa así una figura confusa, que genera contradicciones: como la de fijar la intransferibilidad de las acciones que pertenecen al Estado siendo que la transferibilidad de las acciones es una de las características típicas de las sociedades anónimas. En rigor de verdad el tipo legal que se crea no existe en nuestro ordenamiento legal, ya que no reúne estrictamente las condiciones de una sociedad anónima y ni tampoco de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. En este sentido soy de la opinión que se está creando un nuevo tipo societario.

Asimismo se prevé un objeto social amplísimo para la empresa. Esta podrá realizar todas las actividades que pueden efectuarse sobre todos los bienes energéticos existentes, ya sea a nivel nacional como internacional. Pero en la práctica, por ejemplo, las reservas comprobadas de petróleo de la Argentina las tiene básicamente Repsol YPF, por lo que ENARSA —hasta tanto las citadas fuentes queden libres, tendrá que explorar áreas desconocidas o efectuar recuperaciones secundarias de pozos abandonados, para lo cual se necesita una importante inversión de capital y tecnología.

La amplitud del objeto, sin limitación alguna, se contrapone con lo establecido en los marcos regulatorios del gas y de la electricidad, que fijan la incompatibilidad, para un mismo operador, de efectuar simultáneamente actividades diferentes, correspondientes a las distintas etapas del suministro de los mencionados servicios públicos.

Se otorga a la empresa la titularidad de los permisos de explotación y de las concesiones de explotación sobre la totalidad de las áreas marítimas nacionales que, en realidad, pertenecen a las provincias, tal como lo establece la Constitución Nacional. ¿Cómo se compatibiliza entonces esta disposición del proyecto con nuestra Carta Fundamental?

Por otra parte de concretarse esta actividad en las plataformas marinas se necesitarían inversiones millonarias. En este punto pese a la magnitud de las operaciones que se le asignan a la empresa, el proyecto enviado desde el Senado nada dice con respecto a la partida presupuestaria que se le otorgará, quedando para la reglamentación una disposición vital por los fondos que se pueden afectar o desviar del presupuesto nacional.

En relación con este tema los funcionarios del Ejecutivo aseguran que la sociedad recibirá un mínimo de aporte de capital y que para cumplir con su fin se convocará solo a 24 personas.

Con respecto al estatuto de la sociedad, al no haber sido enviado junto al proyecto de ley, los legisladores desconocemos aspectos de la regulación fundamentales como por ejemplo, con qué criterios se elegirán a los directores, cual será el plan de negocios a cumplir por la empresa, al menos en un corto plazo cual será el rol de las provincias poseedoras del recurso en la administración de la so-

ciudad, y todos los restantes aspectos que hacen al funcionamiento de la nueva sociedad.

Estas observaciones nos muestran las dificultades que puede llegar a tener la empresa que se crea para cumplir con su cometido, sin recursos para explorar ni explotar y con la necesidad de contar con cuantiosos aportes de capital.

La situación se agrava si se tiene en cuenta el accionar del gobierno en la materia. Cabe aclarar que la grave crisis energética que sufre el país en este último tiempo se debe a las graves fallas de control, por parte de los funcionarios de turno, sobre las empresas del sector. Más precisamente los organismos involucrados son la Secretaría de Energía y la de Defensa de la Competencia.

La falta de contralor y del ejercicio del poder regulatorio del Estado hizo que la situación se fuera de las manos y que tengamos que salir a comprar de urgencia gas a Bolivia, fueloil a Venezuela y electricidad a Brasil, a precios internacionales altísimos.

En este contexto y bajo las condiciones descritas se torna muy riesgoso crear una empresa de energía estatal.

Antes de ello, la gran deuda pendiente que tiene el Estado con la sociedad es la realización de un adecuado eficaz control de todas las empresas privatizadas. En este sentido el Parlamento se debe abocar cuanto antes al tratamiento de un marco regulatorio de los servicios públicos que eficiente de una vez por todas el accionar estatal.

Por todo lo expuesto no voy a apoyar el proyecto propuesto.

3

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA WALSH

Fundamentos del voto negativo de la señora diputada al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Economía, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se crea la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA)

Hemos escuchado desarrollar fundamentados cuestionamientos a la legalidad y a la constitucionalidad del proyecto de ley en tratamiento.

He seguido atentamente las discusiones que han tenido lugar en las comisiones respectivas, y he prestado especial atención a las intervenciones que, sobre el particular, distintos señores diputados han realizado.

Se ha planteado la violación a la ley de sociedades, en virtud de la cual, y por el artículo 1° de este proyecto de ley, se constituye ENARSA, de forma tal que se crea un híbrido societario, actitud que la citada ley prohíbe. Nos preguntábamos el porqué de este desguisado.

Se ha planteado también la violación a la ley de hidrocarburos, reiterada como plenamente vigente de acuerdo a las reformas que el miembro informante de la Comisión de Energía ha manifestado que se realizarán al texto que viene del Senado. Nos preguntábamos que necesidad existe de violar otra norma a la que se dice subordinarse.

Se ha planteado también la violación a las normas de la Comisión de Valores, al tiempo que se señala que la empresa que se constituirá deberá aplicar las normas de la misma para cotizar en la Bolsa. Seguimos sin saber cuál era la necesidad de vulnerar otra norma más.

Teníamos cierta prevención, por supuesto, porque algunos de los auspiciantes fundamentales de esta norma habían tenido una activa participación en el proceso de venta de la empresa estatal YPF, o sea que no podíamos asegurar que les preocupara el interés de nuestro pueblo sobre quien explotaría finalmente nuestra riqueza petrolera, y se apoderaría de su renta.

Al mismo tiempo sabíamos que hoy, con muy pocas excepciones, no sería posible defender aquí las privatizaciones y las concesiones de las riquezas nacionales.

Y ello es así porque nuestro pueblo tiene muy en claro las consecuencias que, en carne propia, sufre por las políticas privatizadoras y de concesiones de los últimos 30 años.

Nadie puede defender hoy, al menos fácilmente, las concesiones de los ferrocarriles, que levantaron miles de kilómetros de vías, mataron pueblos enteros, despidieron decenas de miles de trabajadores y hoy le siguen costando al Tesoro miles de millones de pesos por subsidios. Y sabemos de qué forma se prestan esos servicios hoy.

Sólo basta observar el proyecto de ley de presupuesto para el año 2005, que recientemente hemos recibido donde se registra la supuesta preocupación del gobierno nacional para reflotar este servicio público, para lo cual destina una cuantiosa inversión que viene a suplir la falta de inversión que debieron haber hecho los mismos concesionarios.

Podríamos también detallar las consecuencias de la privatización del servicio de agua, pero para ello nos remitimos a los fundamentos de nuestro proyecto de ley de anulación de la concesión a Aguas Argentinas S.A., donde señalamos los atropellos cometidos y lo que ello le costó al Estado y a cada uno de nuestros ciudadanos.

Si pudiéramos en discusión la concesión de las rutas por medio de los peajes, podríamos ver que la mayor obra que hicieron las empresas beneficiadas fueron las casillas para cobrar. Por ello es que hoy, en uno y otro caso, el Estado tiene que hacerse cargo de las obras que los concesionarios no hicieron, y ello se reconoce en el proyecto de ley de presupuesto que nos ha enviado el Poder Ejecutivo para el año 2005.

Pensemos en Aerolíneas Argentinas, donde luego que el fisco nacional debió poner cientos de millones de dólares para cubrir la pérdida que producía estando ya privatizada, llegamos a la situación de hoy de tener una línea aérea que no tiene aviones pero que nos cuesta millones de pesos mensuales.

Y así podríamos seguir detallando, pero queremos hoy centrarnos en el tema energético. Hemos entregado una empresa modelo como YPF, y hemos privatizado nuestro subsuelo. Hemos destrozado a Gas del Estado, a SEGBA y a Agua y Energía.

Hoy vemos bien las consecuencias, con pueblos que fueron prósperos donde hoy gobiernan la desocupación y la miseria.

Tenemos también en cuenta la crisis energética que este año le ha costado al erario cientos de millones de dólares y que provocó cortes de energía a las industrias y suspensión de miles de trabajadores. También queremos decir que la irracional explotación petrolera-gasífera de las concesionarias y privatizadas, cuya única finalidad es la obtención de la mayor ganancia en el menor tiempo posible, ha reducido las reservas gasíferas y petroleras a la mitad de lo que recibieron de la estatal YPF, llegando hoy a niveles críticos.

Conociendo bien los resultados de esta historia, nadie puede decir fácilmente que vamos a privatizar la plataforma submarina argentina, y por ello inventan un camino tortuoso, con contenidos violatorios de la propia Constitución Nacional, y a ello lo llaman ENARSA.

Y esto se desarrolla al mismo tiempo que se reconoce que la renta petrolera es mayor que nunca. Desde el propio ministerio del área se reconoce que el costo petrolero en nuestro país es de 8 dólares el barril, mientras su precio internacional supera en estas horas los 50 dólares.

Habiendo privatizado la explotación petrolera y gasífera, ahora, al subir el precio internacional, las empresas multinacionales nos aumentan el precio de la nafta y la luz, mientras que las exportaciones que ellos realizan de petróleo y gas provocan que nuestro país se quede sin reservas. Y la renta petrolera, de ribetes incalculables, ni siquiera ingresa al país, porque las normas vigentes les autorizan a dejar fuera del país el 70 por ciento del monto de sus exportaciones.

Dijimos que nadie se aventuraría a expresar públicamente que deberíamos privatizar el único recurso potencial que queda en poder del Estado de todo el complejo gasífero-petrolero: la cuenca de un millón de kilómetros cuadrados.

La sociedad atípica que hoy quieren crear, ENARSA, es la forma que encontraron para privatizar. Transfieren la cuenca marítima a esta empresa, que la podrá concesionar a terceros, no quedando claro bajo qué normas, y con el menor control. Para ello fuerzan las normas constitucionales que reconocen que la plataforma marítima es de propiedad

de las provincias, de acuerdo con la reforma constitucional del año 1994.

Bajo el discurso público de explotar, en manos del Estado, las últimas reservas que los gobiernos anteriores no llegaron a privatizar, generan en realidad un instrumento legal para transferirle los derechos de explotación, autorizándola a su vez a que ceda su explotación a terceros.

Si hubieran querido realmente refundar una empresa estatal, hacer nacer una nueva YPF, seguramente hubieran visto y oído la opinión crítica de las empresas multinacionales del rubro. Habríamos sentido sobre nuestras espaldas lo que popularmente se llama "el lobby petrolero". Pero, por el contrario, sólo se ha publicado hoy mismo el anuncio de una empresa extranjera que invertirá en los próximos años, en nuestro país, miles de millones de dólares para explotación petrolera en el mar: ¡han anunciado sus inversiones antes que los diputados tratemos la ley! Y los demás, al callar, han asentido con esta propuesta de ley porque no los afecta. Les conviene.

Es gravísimo que en lugar de estar discutiendo cómo renacionalizar el complejo petrolero-gasífero-energético nos estén planteando que sigamos privatizando. Porque ENARSA es un camino para la privatización de la cuenca marítima.

El dominio del petróleo, el gas y la energía eléctrica, insumos básicos, sustanciales y claves de cualquier proyecto de la economía nacional, debe ser estatal. Y sólo el Estado debe explotarlo, de acuerdo a sus necesidades, porque es la única forma de garantizar la independencia económica. Y por ello este Congreso debería anular las ilegítimas concesiones y privatizaciones que se han efectuado en la década pasada.

Debemos hacernos cargo de la explotación petrolera, quedamos con la renta petrolera, usar la energía para el desarrollo de nuestro pueblo. Es nuestra obligación discutir un plan estratégico energético que comience por controlar la exportación de petróleo en un país que tiene petróleo pero que no es un país petrolero.

Son caducas las concesiones para explotar el petróleo porque no han hecho más que sacar petróleo y gas donde ya YPF, cuando era estatal, había hecho la prospección e incluso los descubrimientos de este recurso. Pensemos que las empresas privatizadas y los concesionarios no han hecho ninguna inversión en gasoductos y oleoductos pese a sus increíbles utilidades.

El Estado debe hacerse cargo de la explotación de la cuenca marítima, junto con las provincias, incorporando la experiencia acumulada por los miles de trabajadores de YPF que Repsol echó a la calle.

Nuestro país debe y puede hacerse cargo de toda la cadena petrolera, de gas y energética y dispone de recursos monetarios para hacerlo. Para empezar tenemos el superávit primario, que en nuestro presupuesto consolidado (Nacional más las 24 provin-

cias) según los primeros cálculos, se estima que oscilaría, para el año 2005, entre los \$ 20.000 y \$ 25.000 millones, a los que podríamos añadir los recursos ocultos que, según el diario "Clarín" del 5/10/2004, llegan al 29 por ciento del total de los depósitos que están en los bancos.

Por todo lo anterior, el bloque de Izquierda Unida va a votar en contra del dictamen de mayoría.

4

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO GIOJA

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Economía, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se crea la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA)

1. Entendemos que en la actual transición que vive la Argentina, urge desarrollar ideas sobre el rol que debe cumplir el Estado para superar la crisis estructural del país.

2. Y en ese sentido la participación del mismo en la actividad económica en general y en el sector energético en particular.

3. En una primera visión, aparece un punto de inflexión a partir del comienzo de la década del 90, donde el Estado concesiona servicios públicos y deja en manos privadas tales funciones.

4. La debilidad y fragilidad de los mecanismos de regulación y control, posteriores a las privatizaciones, junto a la falta de políticas en la materia, trajo aparejado un estado prescindente, desligado de su función prestataria de servicios.

5. A ello se le suma la profunda crisis del 2001, con el quiebre del sistema productivo, financiero y el colapso del sistema económico social, la pérdida de autoridad del Estado y la Argentina al borde de la anarquía. El sector energético no fue la excepción.

6. El sector energético necesita de reglas de juego claras, serias y continuas para lograr su sustentabilidad y desarrollo. Lo cierto es que por la debilidad de la regulación o por el desgobierno que existió en la Argentina a principio del 2001, a la hora de necesitar el país mayor energía el sector no pudo responder por sí mismo.

7. El Estado no es neutral, tiene el deber irrenunciable de regular, controlar, garantizar la prestación de servicios. Tiene la atribución de la prestación misma.

8. La participación del Estado en la economía, no significa retraer la presencia del mercado, pero tampoco significa asumir una postura abstencionista.

9. Debe asegurar la eficiencia transparencia y equidad en la prestación de los servicios públicos y

debe garantizar el desarrollo armónico del país y la más justa distribución del ingreso.

10. Así, en este repensar el rol del Estado se hace necesario acordar una visión realista de la situación Argentina, alejada de esquematismos o ideologismos, que defina caminos a seguir en orden a:

1. Restablecer las reglas directivas e incentivos a fin de que las actuales empresas prestatarias de servicios públicos y aquellas que el Estado les haya concesionado la explotación de riquezas como hidrocarburos, minerales etcétera, reorienten su funcionamiento a favor del interés público y el medio ambiente; y,
2. Recuperar la intervención del Estado en sectores estratégicos, que sin afectar la necesaria competitividad que debe tener la economía, reestablezca el rol del Estado como inductor del desarrollo nacional.

11. La presentación por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto de ley de marco regulatorio, por un lado y la presente propuesta de creación de una S.A. que actúe en el sector energético por otro, nos permiten ser optimistas en el paulatino desarrollo de una política para el sector.

12. La ENARSA constituye la herramienta, que, sin eliminar el mercado, sin vulnerar la seguridad jurídica ni los derechos adquiridos por los inversores privados, avanza en una estrategia de desarrollo basada en la recuperación del rol activo del Estado constituyéndose en una sociedad anónima dinámica, moderna en un área de puntal como es la energética.

13. La oposición cuestiona el control de la figura societaria (-S.A.-) y la, posible modificación de la estructura del capital. En relación al control, la S.A. como esta diseñada tendrá más, o a lo sumo igual control que una S.A. con mayoría estatal a saber:

a) Los controles privados propios del tipo societario (sindicatura);

b) Los del artículo 299 de la ley 19.550 (control estatal permanente) (están obligadas a este régimen las S.A. que realizan oferta pública de acciones y/o aquellas que tengan concesiones de servicios del Estado, que es el caso de ENARSA); y,

c) Los que por ley tienen el Ejecutivo y Legislativo allí donde hay fondos públicos (SIGEN y AGN, respectivamente). Y respecto de la estructura de capital, es facultad de la asamblea su modificación. La asamblea es el Estado, por lo tanto, es un absurdo su modificación sin la anuencia del mismo.

14. Asunimos la defensa de la creación de ENARSA desde:

a) La responsabilidad de acompañar al gobierno nacional;

b) La pertenencia a un proyecto transformador para el país liderado por Néstor Kirchner; y

c) La concepción ideológica que informa nuestra función de legisladores, la del justicialismo, la de estar al servicio de nuestro pueblo.

INSERCIÓN SOLICITADA
POR LA SEÑORA DIPUTADA ROMERO

**Fundamentos del apoyo de la señora
diputada al dictamen de mayoría de las comisiones
de Energía y Combustibles, de Economía,
de Legislación General y de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de ley en revisión
por el que se crea la empresa
Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA).**

Luego de escuchar atentamente los argumentos de los señores diputados que se han opuesto al proyecto de creación de ENARSA, creo que resulta de vital importancia precisar algunas cuestiones atinentes al marco legal que se propone, tan duramente atacado por quienes lo impugnan.

Está claro en mi concepto que la inclusión del tipo societario creado en la sección V, capítulo II de la Ley de Sociedades 19.550, no confronta ni con el espíritu de la norma marco de sociedades ni con el del tipo especial que en el caso de ENARSA se pretende crear.

La significación de haber elegido una sociedad anónima ordinaria y dejar de lado las previstas en la sección VII tiene especial significación si se piensa que funcionará con empleados sujetos al régimen de empleo privado, teniendo como objetivo ser una entidad ágil, eficiente, con posibilidades reales de hacer buenos negocios para el Estado y en consecuencia para los argentinos, con aptitud para insertarse en un mercado altamente competitivo con posibilidades de éxito.

La elección de ser una sociedad anónima como otras (poseída por el Estado como prefieren decir sus impulsores), privilegia conformar un instrumento legal que iguale a sus competidoras en el mercado y no repita ninguno de los modelos que se destacaron por su ineficiencia y carencia de ductilidad para hacer buenos negocios.

Otra de las críticas vertidas apunta a una supuesta violación del artículo 124, última parte de la Constitución Nacional. Específicamente se refiere al dominio de las provincias sobre sus recursos naturales. Si se compatibiliza lo normado por la ley 17.319, con la ley que establece las líneas de base -23.968- veremos que el mar territorial se extiende hasta las doscientas millas, y en esa zona económica exclusiva la Nación ejerce derechos soberanos para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos (artículo 5º).

El mar territorial, por otra parte, se extiende hasta una distancia de doce millas espacio en el cual el Estado ejerce soberanía plena no sólo sobre las aguas, sino además sobre el espacio aéreo, lecho y subsuelo (artículo 3º, ley 23.968).

Por último y sobre este punto, destaco que en ENARSA la Nación y las provincias concurren en

calidad de accionistas con voto y titulares de los cargos en el directorio, razón por la cual no existe colisión de intereses ni avance sobre los derechos y recursos de estas últimas, como se ha sostenido por alguno de los señores diputados.

El Estado puede con este instrumento legal contar con la posibilidad de que evite abusos por la existencia de posiciones dominantes por parte de las pocas empresas se reparten la explotación del sector energético, sin que por ello regresen al paradigma del Estado empresario que ha sido criticado muchas veces con razones, otras desde los más puros intereses del sector privado.

La ENARSA es creada para dotar al pueblo argentino de una posibilidad de incidencia en materia energética. Qué duda cabe de la relevancia estratégica de esos recursos, para cualquier nación del mundo que se precie de defender sus intereses y el bienestar de sus pobladores.

Se ha atacado la forma societaria elegida diciéndose —con argumentos que veo inconsistentes— que nació “muerta”, toda vez que la ley 19.550 no autoriza ese tipo societario. Como he mencionado, nada de eso ocurre en el presente caso. No sólo está dentro de las previsiones de la ley marco, sino que —enfáticamente hay que resaltarlo— una ley especial puede otorgar calidades especiales a un tipo de sociedad que se crea en defensa de los recursos estratégicos de la nación.

Otro de los cuestionamientos, es el carácter intransferible de las acciones en manos del Estado. Se ha dicho —en frágil argumentación— que ese carácter de las acciones puede ser mutado por estatuto o por asamblea. Nada más alejado de la realidad. La ley que aprobamos tiene el valor del acta constitutiva de la sociedad anónima. Tales acciones (en manos del Estado nacional y de las provincias argentinas) no podrán mutar su calidad de intransferibles, porque si así fuera, estarían vulnerando la ley de creación. Y esa ley, precisamente, es la que habilita y otorga marco legal a las acciones cuyo carácter intransferible se pretende cuestionar. Nada, ninguna norma, prohíbe tal calidad. Y por si fuera poco, la ley de creación las habilita.

La ENARSA tendrá doble control: el de las sociedades anónimas y el contralor especial de la Ley de Administración Financiera 24.156. Ningún reproche más puede hacerse a la falta supuesta de controles que contenía el proyecto original, con los agregados que las comisiones han efectuado al mismo. Se tendrá que someter a los parámetros de actuación de un buen “hombre de negocios” como manda el derecho comercial, y a su vez, deberá responder a los requerimientos de control previo y posterior establecidos por la ley 24.156, es decir Sindicatura General de la Nación y Auditoría General de la Nación. En el caso de la exitosa Petrobras, la misma está sometida al control del Tribunal de Contas de Unión. En el caso de la venezolana “PDVSA”, responde a la fiscalización de la Contraloría General de la República.

Es claro que el Estado se arroga especiales facultades al conceder la titularidad de los permisos de exploración y de las expresiones de explotación sobre la totalidad de las áreas marítimas nacionales, pero lo no puedo dejar de contestar, dadas las reiteradas expresiones vertidas por los señores diputados en el recinto, es que no es cierto que con ello se viole ninguna de las disposiciones de la ley 17.319 ni las normas regulatorias vigentes en relación con la explotación de recursos energéticos.

Y ello porque con toda convicción debemos sostener que lejos estamos de un Estado dadivoso y abdicante respecto de su rol regulador. Muy por el contrario, reasumiendo el rol activo que jamás debió abandonarse, sostenemos que ese marco regulatorio está destinado a quienes exploran, explotan, transportan y comercializan energía en cualquiera de sus formas, con el único objetivo de lucrar con la actividad, pero podemos imponerle iguales limitaciones a una empresa poseída por el Estado cuyo principal objetivo es el bienestar general aunque se convierta en una competencia en sector con calidad y aptitud de primera categoría. De tal modo, sostengo sin hesitación que el marco regulatorio establecido en materia de concesiones no está vulnerado por la norma en tratamiento, toda vez que a la empresa que se crea no le caben los mismos reparos o restricciones que a aquellas cuyo único fin sea el afán de lucro y el beneficio para el sector privado.

En conclusión, entiendo que muchas de las críticas a la forma societaria elegida o al articulado de la ley, esconden en verdad una crítica a los objetivos que inspiran la creación de ENARSA. Esa crítica que no en todos los casos se ha explicitado, sino que subyace a los argumentos formales, está vinculada con aquellos sectores que tienen nostalgia de los noventa, apegados a un Estado mínimo, desregulador, casi abandonico, que nos dejó la mayor pobreza, desocupación y extranjerización de nuestros recursos estratégicos, situación de la cual estamos procurando salir, asumiendo autocriticamente lo que nos toca de la historia reciente.

6

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR
DIPUTADO DÍAZ BANCALARI

Fundamentos del apoyo del señor diputado al dictamen de mayoría de las comisiones de Energía y Combustibles, de Economía, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se crea la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA)

Es difícil constatar en su real magnitud todo lo que se logró después del estallido institucional de diciembre de 2001. Una emergencia inédita, conducida por Eduardo Duhalde, permitió pacificar los espíritus y reencaminar al país por la senda de la institucionalidad.

La pelea que dimos en el plano institucional —y la ganamos— ahora debe darse en el plano cultural porque algunos conceptos instalados por las minorías retrógradas devinieron en zonceras, es decir, en instrumento de colonización pedagógica. Esos conceptos en reiteradas ocasiones se adoptaron sin análisis crítico previo como verdades reveladas y a lo largo del tiempo, terminaron por neutralizar la lutoestimación la creatividad y el despegue argentinos.

Los tareas pendientes son por todos conocidas y están a la vista: 15 millones de pobres, una deuda pública del orden de los 180.000 millones de dólares, desempleo y exclusión.

Todos estos flagelos deben ser tenidos en cuenta a la hora del debate político, cualquiera sea el tema estratégico que se aborde. Una mirada crítica de la realidad imperante nos lleva a los peronistas a asumir nuevas responsabilidades.

Algunos intelectuales sostienen que nuestro pensamiento “representa el fin de la dictadura militar”. Es decir una superación, un salto cualitativo en la construcción de un nuevo proyecto nacional, distante de las copias, de la las continuidades o de los ensayos de laboratorio que siempre han fracasado por falta de realismo.

Conviene una aclaración para aventar interpretaciones difusas: nuestro pensamiento coloca los asuntos estratégicos del país en una nueva lógica política: la lógica del interés nacional, de acuerdo a lo que siempre sostuvo el movimiento popular al que pertenecemos, con su historia militante y su tremenda vocación transformadora.

Nosotros no nos conformamos con la gobernabilidad, sino con la resolución de los problemas de la gobernabilidad. El orden que buscamos es el orden reivindicativo sustentado en la creación de trabajo, en el fortalecimiento de la producción nacional y en la elevación cultural del hombre argentino.

Un gobierno puede pasar a la posteridad como un administrador o como un transformador. Los justicialistas creemos que hoy en la Casa Rosada tenemos a un gobernante, a un hombre argentino que asume la realidad argentina con vocación argentina y que busca por todos los medios respuestas argentinas.

Una de esas respuestas, es la creación de (ENARSA). Defendemos este proyecto por las razones que obtenemos de la lógica del interés nacional que encarna nuestro gobierno y que acompañamos los peronistas y los aliados de la causa nacional y popular.

De ningún modo (ENARSA) es una respuesta improvisada a la crisis energética reciente, tampoco es un efecto mediático. Es una respuesta argentina a un problema estratégico que va más allá de la coyuntura, que apunta a devolver al país su capacidad decisoria en el sector hidrocarburos, lo que nos permitirá decirle al mundo que en nuestra patria los recursos naturales no renovables son defendidos para las actuales y las futuras generaciones.

Los apologistas del viejo modelo que posibilitaba una transferencia ilimitada de las rentas al exterior o esgrimen argumentos simplistas, como la supuesta ineficiencia. Es un prejuicio que se utilizó en su momento para fundamentar la privatización de las empresas públicas: el Estado es mal administrador.

Esa mentira total y absoluta es denigrante y conspira contra la autoestima de los argentinos, porque el Estado es un instrumento y sirve al interés nacional si se lo conduce a tal fin, o sirve a la enajenación de las riquezas propias si se lo utiliza a tal fin, o se convierte en un verdugo de los argentinos si se lo conduce a tal fin.

Por eso, de acuerdo al objeto que tengan los gobernantes será el resultado que se obtenga de parte del Estado. Una dirigencia preocupada sólo por el éxito económico del sector privado se ocupará del orden en las calles, sin importarle la justicia social o la equidad. En cambio una dirigencia comprometida con su pueblo privilegiará el interés nacional y preservará la igualdad de oportunidades, generando un ámbito en el que la competencia no signifique el triunfo del poderoso sobre el débil.

El Estado, en nuestra concepción, está para solucionar los problemas de las mayorías excluidas y carentes de recursos. No está para apalear en nombre de un supuesto orden que enmascara privilegios de círculo. Tampoco está para despilfarrar el dinero de los contribuyentes. Está para cumplir con las obligaciones constitucionales y para devolver a los argentinos su autoestima aniquilada por años de entrega, sumisión y obscenidad neoliberal.

No hablamos de un Estado clasista ni de un Estado empresario. Hablamos de un Estado que cumple con su misión estratégica, que no es otra que ejercer el poder nacional sin claudicaciones.

La ENARSA nacerá de la mano del Estado. El Estado tendrá mayoría accionaria, pero se regirá de acuerdo a la Ley de Sociedades Anónimas y estará sometida a los controles interno y externo del sector público nacional en los términos de la ley 24.156. Por tanto, ninguno de sus directivos quedará sin contralor como subrepticamente algunas voces agoreras pretenden hacer creer a la sociedad.

La ENARSA se crea a fines de fortalecer la producción y el trabajo. Así como el 25 de mayo de 2003, el presidente Kirchner esbozó los lineamientos de un nuevo proyecto nacional y advirtió que no representaba el proyecto del *default*, también subrayó la necesidad de profundizar las políticas nacionales que nos devuelvan a los argentinos las posibilidades de vivir con dignidad. Y sólo se alcanza la dignidad con trabajo y producción, con producción de bienes y servicios que elevan la calidad de vida y con derechos sociales que nos garantizan justificar el esfuerzo cotidiano.

Para pasar de la reactivación al crecimiento algunos gurús de la *city* nos reclaman inversiones. Bien ENARSA será una fuente de inversiones y de producción de negocios.

La economía consiste en hacer buenos negocios. Se torna imperioso para ello, para las industrias que reabren sus puertas o para las que deciden instalarse aprovechando la etapa de reactivación inicial, explorar y buscar yacimientos de gas natural, así como también explorar y buscar nuevos yacimientos de hidrocarburos en la plataforma marítima, asociándonos a terceros, para utilizar o exportar lo producido y explotar las diversas gamas productivas del sector.

Así tendremos la posibilidad de recuperar los recursos energéticos en un contexto en que se vuelve a desarrollar la Argentina, luego de la postración a que nos sumió la desorganización y la falta de previsión. Volvamos a dar a la Argentina, entonces, una adecuada juridicidad en los hechos y ENARSA se trata de un instrumento real y estratégico que nos pondrá en un plano de modernidad similar a la de otros países a los que no le resulta inapropiado defender y usufructuar lo que les pertenece.

Sacar a relucir errores antes de tiempo o anticipar el aprovechamiento de circunstancias inexistentes —¿quién puede asegurar que la futura empresa se dedicará a ser una agencia de empleos mal remunerados y sin asignación de tareas específicas?— es un atropello al sentido común. La disidencia por razones ideológicas es una cuestión, pero la disidencia apresurada por irracionalidad es algo inadmisibles para quienes pretendemos recorrer el camino que nos marca la lógica del interés nacional.

La ENARSA es, además, una expresión de auténtico compromiso federal entre las provincias y la administración central. Esta facultad de poseer un patrimonio común entre la Nación y las provincias es un avance en la definición de las políticas creativas, audaces y autónomas que cualquier nación independiente debe darse para desarrollarse de acuerdo a sus iniciativas, y no a las imposiciones foráneas.

La futura empresa no va a inmiscuirse en los negocios privados ya establecidos ni va a aprovecharse de las circunstancias políticas del momento para favorecer a tal o cual inversor, porque opinar de esa forma es clausurar de antemano cualquier éxito.

Nosotros queremos tener éxito con transparencia en la gestión, y el proyecto se ha modificado no porque fuera erróneo sino para no dejar lugar a duda alguna. Esto demuestra que no nos aferramos a nuestra condición mayoritaria para aprobar cualquier proyecto, sino que actuamos de acuerdo al mejoramiento del proyecto que estamos debatiendo.

Con ENARSA la bandera argentina vuelve a flamear orgullosa sobre el patrimonio nacional de los argentinos. Para eso queremos votar este proyecto y para eso hemos iniciado una vuelta de hoja en la historia contemporánea: para hacer un gran país en serio con hombres y mujeres que vivan con dignidad y que defiendan lo que Dios les prodigó a manos llenas.

INSERCIÓN SOLICITADA
POR LA SEÑORA DIPUTADA CASSESE

Opinión de la señora diputada acerca del artículo 6° del proyecto de ley en revisión por el cual se crea la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima

1. Un texto breve y conceptual

El artículo 6° del proyecto de ley aprobado por el Senado y remitido a la Cámara de Diputados define la condición jurídica (la naturaleza, se podría decir) de la sociedad a crear y prevé el control interno y externo del Estado, que será su accionista mayoritario permanente e insustituible.

El texto proyectado es breve y conceptual en todos sus artículos, sin incurrir en enunciados redundantes cuya redacción podría introducir eventuales discordancias con la compleja normativa societaria y administrativa que no modifica, excepto en lo que expresamente se aparta de ella.

Por tanto, el artículo 6° debe ser examinado, al igual que los demás, con rigor jurídico y precisión terminológica, para evitar interpretaciones que puedan desviar la comprensión del texto y extraer conclusiones que se aparten de su finalidad.

2. Condición jurídica de ENARSA

El artículo en análisis dice que la sociedad ejercerá todas las atribuciones ... de las personas jurídicas de su tipo, lo cual significa que no será una entidad pública, sino una empresa poseída mayoritariamente por el Estado, que actuará como una sociedad anónima de tipo especial, regida por la ley 19.550 y su ley de creación. Es decir, será una persona jurídica de derecho privado.

3. Control interno y externo

El artículo en examen dice también que la sociedad... estará sometida a los mismos controles, interno y externo, de las personas jurídicas de su tipo. Tal terminología no es de derecho societario, sino de derecho administrativo, y se refiere indudablemente al control estatal, por ser una sociedad de tipo especial.

En efecto, en la ley 19.550, de sociedades comerciales, control significa poder de decisión a través de los votos poseídos, directa o indirectamente, por el accionista dominante (artículo 33), que puede ser una persona física o jurídica o un grupo societario, sometido a responsabilidades especiales en tanto accionista controlante (artículo 54). Los síndicos llevan a cabo la fiscalización privada (artículo 284) y las autoridades administrativas de contralor (la Inspección General de Justicia o sus similares provinciales o la Comisión Nacional de Valores, según los casos) ejercen la fiscalización estatal (artículo 299).

Es decir, en la ley 19.550 no se habla ni de control interno ni de control externo para las sociedades anónimas, porque en ellas no se aplican tales conceptos que rigen para las empresas con participación estatal.

4. Aplicación de la ley 24.156

Es la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional 24.156, la que establece los sistemas de control interno y externo, cuyos órganos rectores son respectivamente la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (artículo 7°).

Las disposiciones de dicha ley —conforme a su artículo 8° modificado por la ley 25.565— se aplican (entre otros entes) a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria; las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias (artículo 8°, inciso b)).

Es a este concepto de control interno y externo al que alude el proyecto de ley en su artículo 6°.

5. La SIGEN (control interno)

La citada ley 24.156 dispone que en los casos en que el Estado tenga participación accionaria mayoritaria en sociedades anónimas, la Sindicatura General de la Nación propondrá a los organismos que ejerzan los derechos societarios del Estado nacional, la designación de los funcionarios que en carácter de síndicos integrarán las comisiones fiscalizadoras, de acuerdo con lo que dispongan sus propios estatutos (artículo 114).

La propia SIGEN, en su sitio web, explica en los siguientes términos dicha norma, que tiene un alcance mucho mayor que el previsto por la ley 19.550 para los síndicos de las sociedades anónimas comunes:

Los síndicos designados, serán funcionarios de la SIGEN y en el supuesto de dejar de serlo, cesan en sus cargos, debiendo asumir el suplente correspondiente. Asimismo, en ejercicio de sus competencias, tendrán las atribuciones y deberes previstos en la Ley de Sociedades en todo lo que no se oponga a la Ley de Administración Financiera de los Sistemas de Control.

En tal carácter, los síndicos deben cumplir las previsiones contenidas en la ley 24.156, debiendo contribuir al aseguramiento de los objetivos previstos en dicho cuerpo normativo. Así, ejercen las funciones de coordinación y supervisión asignadas a SIGEN en relación inmediata con las sociedades y empresas con participación estatal, supervisan a las unidades de auditoría interna existentes en éstas y propenden a la implantación y mantenimiento, por parte de estas entidades, de un eficaz y eficiente sistema de control interno.

En sentido similar, estos funcionarios deben cumplir y vigilar la sujeción de estas entidades a las disposiciones de la ley 19.550 que resulten de aplicación, según la naturaleza jurídica o forma societaria de las mismas.

Por último, dentro del amplio plexo normativo que deben observar en su accionar, los síndicos deben sujetarse a las disposiciones técnicas de los respectivos colegios y consejos profesionales.

El desarrollo de estas actividades, presupone la obligación de generar las recomendaciones a las empresas y sociedades e informar a la Sindicatura General de la Nación los actos y omisiones que signifiquen incumplimientos o irregularidades, a fin de que ésta, si lo considera pertinente, pueda ejercer las funciones de información, previstas en la ley 24.156.

A fin de realizar una correcta organización y reglamentación de estas actividades, el órgano rector del control interno, dictó la resolución 35/94-SGN, en cuya virtud se aprobó el reglamento interno de las comisiones fiscalizadoras y síndicos destacados por la SIGEN ante las sociedades y empresas, estableciéndose las pautas mínimas para su desempeño fijando objetivos, funciones, deberes, atribuciones, plazos, formas y contenidos de la información que deberán suministrar. Esta resolución complementa y explicita las responsabilidades y funciones descritas en los párrafos precedentes.

6. *La Auditoría General de la Nación (control externo)*

La Auditoría General de la Nación (dependiente del Congreso Nacional) es el ente de control externo del sector público nacional (ley 24.156, artículo 116), que abarca la administración central, los organismos descentralizados y las empresas o sociedades con participación del Estado nacional (ley cit., artículo 8°, inciso b).

Entre otras funciones, en el marco del Programa de Acción Anual de Control Externo que le fijan las comisiones Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras del Congreso (ley cit., artículo 116), la Auditoría General de la Nación tiene competencia para auditar y emitir opinión sobre la memoria y los estados contables financieros así como del grado de cumplimiento de los planes de acción y presupuesto de las empresas y sociedades del Estado (ley cit., artículo 118), categoría que abarca —tal como ya se ha mencionado— todas las organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias (ley cit., artículo 8°, inciso b).

8

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO VANOSSI

Fundamentos de la oposición del señor diputado al proyecto de ley en revisión por el cual se crea la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima

Es conocida la buena voluntad que siempre hemos puesto para tratar de activar el funcionamiento

legislativo de esta Cámara y, por supuesto, para dar recepción también a los proyectos que envía el Poder Ejecutivo para su consideración.

Sin embargo, este proyecto, con la redacción que ha aprobado el Senado, excede en alguna medida la tolerancia de nuestra presión estomacal. Y digo esto sin querer descalificar al proyecto en su totalidad o a la idea en sí, sino porque tenemos grandes dudas sobre la real funcionalidad y finalidad que pueda cumplir, no sólo ahora en el presente, sino también en el futuro, cuando pueda estar en otras manos o tener una orientación distinta. Esto tiene que ser calibrado de manera tal que esté por encima de los vaivenes temporales que en algún momento pueden ser positivos y en otros negativos.

Acá no está en debate —lo han dicho diputados preopinantes como Pinedo, Natale y otros, a cuyos discursos me remito— un problema de maniqueísmo de que todas las empresas del Estado son buenas o malas, o de que todas las empresas privadas son buenas o malas. La experiencia argentina demuestra que no existe una regla general absoluta. Hemos conocido buenas y malas empresas del Estado y buenas y muy malas empresas privadas. De modo que el debate no es una antinomia o una supuesta oposición total entre estatismo versus privatismo. Se trata de otra cosa.

Esa otra cosa llama la atención por algunos fenómenos que vamos viendo. Por ejemplo, vimos que en su momento se creó LAFSA frente a la crisis obvia y notoria del transporte aerocomercial. Pero LAFSA existe nominalmente. Ahora vemos que se pretende crear ENARSA, entonces nos preguntamos ¿después de esto qué? ¿Cómo sigue la película? ¿Vamos a crear otras empresas, algunas por decreto y otras por ley, según las circunstancias?

Nosotros pensamos que lo que importa es poner el acento en el marco regulatorio de los sectores, que en este caso particular es el energético. Es allí donde realmente habría que poner el acento.

También podemos formularnos varias preguntas. ¿Es dable sustituir lisa y llanamente? ¿Es dable regular? ¿Es dable controlar?

Preferimos fundamentalmente regular a las concesionarias y controlar, pero entendiendo por control no algo muy débil, muy lábil o muy abstracto sino algo que conduzca directamente a las responsabilidades. El control no es un fin en sí mismo sino que es la antesala de la responsabilidad.

El control vale en la medida en que abre las puertas para que recaigan responsabilidades respecto de una buena o mala gestión, de una gestión lícita o ilícita, según los casos.

Yo mencionaba recién el caso de LAFSA, que no tiene aviones, sino que opera con aviones de otra compañía, SW, e incluso ha recibido un aporte estatal considerable, que ha tenido que llegar rápidamente por emergencia. Porque asistimos a una situación que parece casi inexorable —esperemos que

no lo sea— de llegar no digo a un monopolio pero sí un oligopolio del transporte aéreo y sabemos que todo monopolio, sea privado o es negativo o pernicioso, y no quisiéramos que se repitiera en otras actividades.

Así como LAFSA no tiene aviones, uno podría preguntarse con visión de futuro qué va a tener ENARSA, en qué va a consistir ENARSA, ¿o será simplemente una empresa virtual, como es LAFSA en la actualidad?

Hay motivos para temer un riesgo, el de que vayamos creando sucesivas empresas pantalla. Son empresas virtuales, o en su caso pueden fungir como empresas pantalla.

¿Por qué se la crea a tambor batiente? ¿Será por aquello de que el pabellón cubre la mercadería, y por lo tanto hay que tener rápidamente este nuevo pabellón?

Formulo un recuerdo histórico respecto de algo que merece elogio. ¿Qué diferencia con los viejos Ferrocarriles del Estado, que el Estado creó con toda su energía para llegar a los lugares donde no llegaban ni las empresas de capital inglés ni las de capital francés! Estas últimas, especialmente en la provincia de Santa Fe, cumplían funciones de fomento, y daban cobertura comunicacional a áreas olvidadas y aisladas, que precisamente con la crisis de la red ferroviaria han vuelto a quedar aisladas y abandonadas y de ellas han emigrado sus pobladores. En esos ferrocarriles que Estado organizó hubo un gran esfuerzo, una gran inversión por parte del Estado, que puso todo lo necesario para que eso realmente tuviera realidad y no virtualidad.

Creo que en el texto, tal como viene redactado en la sanción del Senado, no se conjugan suficiente y adecuadamente términos tales como “licitación”—léase: transparencia—, y los controles no son suficientes porque no ponen el acento en lo que recién remarqué, que es lo que importa, que son las responsabilidades.

Por último, queda flotando en el ambiente un gran temor que no puedo ocultar: si esto no es el telón de fondo para dar cobertura —y ya algún diputado lo mencionó— a meras operaciones comerciales, es decir, a negocios con el exterior y/o en el exterior. Más que una empresa argentina va a ser una empresa para operar comercialmente con el exterior o en el exterior.

Por eso, creo que tal como viene redactado del Senado, el proyecto es inviable, y que merecería, aprovechando esta instancia de estudio, análisis y reflexión, y la posibilidad de tener la presencia del ministro en los próximos días, que desapasionadamente veamos si puede tomar otra dirección, eliminar las sospechas que recaen sobre el ambiente y no convertirse en una herramienta que el día de mañana, no hablo del actual presidente, con otros gobiernos, otras administraciones, pueda tener un efecto catastrófico para la economía del país y para su imagen de transparencia.

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO DIAZ BANCALARI

Homenaje del señor diputado a la memoria de don José Ignacio Rucci

Recordar sin menoscabar la memoria colectiva es la tarea que todos los pueblos encaran para sobrevivir a las tragedias.

Recordar, homenajear, mantener viva la llama de la vida más allá de la muerte, es tarea no siempre ecuaníme y por querer hacer justicia suele privilegiarse a las parcialidades.

Hubo una época de enfrentamientos en el movimiento peronista y en la sociedad argentina de la que nadie, absolutamente nadie, puede sacar réditos en el presente porque la muerte sólo es ejemplo a imitar cuando sirve para enaltecer la convivencia, la fraternidad y la unidad en el presente. Las muertes que dividen se cobran nuevas vidas y eso nunca puede ser aceptado.

José Ignacio Rucci fue una de las tantas víctimas que se cobró la intolerancia y la violencia fratricida. Lo cierto es que Perón, al enterarse del homicidio, dijo: “me cortaron las patas”. Y Dardo Cabo, desde las páginas de “El Descamisado” llamó a la reflexión de los sectores en pugna para frenar la escalada asesina.

¿De qué sirve reiterar acusaciones a diestra y siniestra? El que tiene la verdad no necesita la violencia, porque el que tiene la violencia nunca conseguirá la verdad, sentenciaba el Perón de la unidad nacional en aquellos días aciagos.

Lo importante es que triunfe la política, y la política triunfa no en las componendas o en las transacciones para ocultar todo y no hacer olas. La política triunfa cuando se impone la racionalidad, el debate leal y la propuesta.

El triunfo de la política es el triunfo de la convivencia, de la pluralidad, del respeto por la idea ajena. Pensar distinto no es delito. Delito es negar la posibilidad de expresión al otro que dice lo que no me gusta, pero que tiene derecho a expresarse con el único límite que marca la ley.

Rucci encarnó mejor que ninguno el valor de la lealtad. Fue leal a los trabajadores que representaba y leal a Perón, quien lo conducía. Fue leal hasta la muerte, el precio más caro con que un dirigente paga su entrega a la causa del pueblo. Fue leal por convicción y no por conveniencia.

Ha sido tan grande la figura de Rucci que después de muerto creció hasta rozar las fronteras del mito. Pero que su figura grande y honorable sirva para unir a los argentinos, cualquiera sea su pertenencia partidaria. Sería una muerte en vano si su figura generara divisiones. ¿Para qué guerrear con los fantasmas del pasado? ¿Cuál es el enemigo? El enemigo de hoy es la desocupación, la miseria espiritual, los